

**TEMA 18.- Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del sector público. Partes en el contrato: órganos de contratación. Capacidad de solvencia del empresario. Objeto, precio y cuantía del contrato. Revisión de precios en los contratos de las administraciones públicas. Garantías exigibles en la contratación del sector público. Preparación de los contratos: expediente de contratación. Pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas. Adjudicación de los contratos de las administraciones públicas: normas generales. Publicidad. Licitación. Selección del adjudicatario.**

## **1. LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.**

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), tiene por objeto regular la contratación del sector público y el régimen jurídico aplicable a los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos.

En cuanto al ámbito de aplicación, regula el artículo 2, que están sometidos a la presente Ley los contratos onerosos celebrados por las entidades del Sector Público. Se entenderá que un contrato tiene carácter oneroso en los casos en que el contratista obtenga algún tipo de beneficio económico, ya sea de forma directa o indirecta

Esta Ley también es de aplicación a los contratos celebrados por las Comunidades Autónomas, Entidades Locales y sus organismos.

En cuanto al **ámbito de aplicación subjetivo** la Ley distingue 3 grupos de sujetos:

- 1) **Las Administraciones Públicas en sentido estricto** (artículo 3.2): la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, las entidades de la Administración Local, Seguridad Social, los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas, los consorcios y otras entidades de derecho público vinculadas o dependientes de una Administración Pública
- 2) **Los Poderes Adjudicadores**, (artículo 3.3): Son Poderes Adjudicadores las Administraciones Públicas pero además la Ley atribuye este carácter a, entre otros, las fundaciones públicas, las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, y entidades de derecho público diferentes a las primeras
- 3) **Otros sujetos del Sector Público** (artículo 3.1) que no son ni Administración Pública ni Poder Adjudicador, como sociedades mercantiles públicas, fondos sin personalidad jurídica....

Una de las novedades más importantes en el ámbito subjetivo, es que se han incluido los partidos políticos, las organizaciones sindicales y las empresariales, así como las fundaciones y asociaciones vinculadas a cualquiera de ellos

La importancia de esa distinción en tres grupos de sujetos radica en el grado de aplicación de la LCSP:

- aplicación “íntegra” a las Administraciones Públicas,
- “media” a los Poderes Adjudicadores que no tienen la consideración de Administración Pública en sentido estricto,
- “mínima” a los demás sujetos que forman parte del sector público, y no son ni Administración Pública ni Poder Adjudicador.

### 1.1. TIPOS CONTRACTUALES

La LCSP regula diferentes tipos de contratos que se pueden clasificar en atención a los siguientes criterios:

#### 1. En función al objeto: Típicos, especiales y mixtos

Los **contratos típicos** son los expresamente denominados por la Ley del siguiente modo:

- El contrato de obras.
- El contrato de concesión de obras.
- El contrato de concesión de servicios.
- El contrato de servicios.
- El contrato de suministro.

Los **contratos especiales** son aquellos cuyo objeto es distinto a los contratos típicos pero que satisfacen de forma directa una finalidad pública

Los **contratos mixtos** son los que contienen prestaciones correspondientes a contratos de distinta clase que se fusionan en una sola contratación por estar vinculados entre sí o ser complementarios.

#### 2. En función de quien los celebra pueden ser contratos administrativos y contratos privados.

**Contratos administrativos:** son los celebrados por una Administración Pública

#### TÍPICOS:

- Contratos de obra
- Concesión de Obra
- Concesión de Servicios
- Suministro
- Servicios (salvo Servicios Financieros y los que tienen por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos)

**ESPECIALES:** Los contratos declarados así expresamente por una Ley, y aquellos otros de objeto distinto a los anteriores, pero que tengan naturaleza administrativa especial por estar vinculados al giro o tráfico específico de la Administración contratante o por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de aquella.

**MIXTOS:** contrato con prestaciones de varias clases.

**Contratos Privados:** pueden ser celebrados por una Administración Pública o por el resto de entidades del Sector Público.

- Celebrados por una ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:
  - ✓ cuyo objeto sea distinto de los anteriores.
  - ✓ Servicios Financieros y los que tienen por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos
  - ✓ Suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos
- Celebrados por entidades del Sector Público, que siendo PODER ADJUDICADOR NO reúna la condición de ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
- Celebrados por entidades del SECTOR PÚBLICO, que NO reúna la condición de PODER ADJUDICADOR.

El **régimen jurídico** de los contratos se ajustará a las siguientes reglas:

**Contratos administrativos:** en su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción se regirán por la LCSP y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas.

**Contratos privados:** en general en cuanto a su preparación y adjudicación se les aplica el Libro I y el Libro II de la LCSP; y en cuanto a sus efectos y extinción serán aplicables las normas de derecho privado, con algunas salvedades.

### 3. Clasificación en función de la sujeción o no a las normas procedentes del derecho de la Unión Europea.

En este sentido se ha acuñado el término legal de **contratos sujetos a regulación armonizada** (SARA) que se define por razón de la entidad contratante, de su tipo y cuantía y están sometidos a las directrices europeas. Las cuantías se fijan cada dos años por la Comisión Europea.

Para los años 2018 y 2019 son:

- Contratos de obras, concesión de obras y concesión de servicios, cuando su valor estimado sea igual o superior a 5.548.000 €, IVA excluido.
- Contratos de suministros y servicios, cuando su valor estimado sea igual o superior a 144.000 euros para la Administración Estatal y 221.000 euros resto de Administraciones
- Contratos de servicios especiales (servicios sociales, de salud, educativos, culturales y otros servicios específicos), cuando su valor estimado sea igual o superior a 750.000 €, IVA excluido.
- Son contratos subvencionados de obras siempre que su valor estimado sea igual o superior a 5.548.000 euros y contratos de servicios vinculados a un contrato de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 221.000 euros.

No obstante lo anterior, no se consideran SARA, cualquiera que sea el valor estimado, determinados contratos en función de su objeto. Un ejemplo de ello serían los que tengan por objeto la producción de servicios radiofónicos, la explotación de redes de comunicaciones, servicios jurídicos de defensa legal o el transporte de viajeros en metro

## 1.2. LAS PARTES.

### 1.2.1. Órganos de contratación.

La LCSP regula los órganos competentes para contratar según la entidad que se trate e identifica a éstos según el ente u organismo ante el que nos encontremos.

- Los Ministros y los Secretarios de Estado en la Administración General del Estado.
- Los Presidentes o Directores de los organismos autónomos, Agencias Estatales, entidades públicas empresariales y demás entidades públicas.
- Los Alcaldes, Presidentes o el Pleno en las Entidades locales (Disposición adicional segunda LCSP).

**En concreto, y para las entidades locales, la Ley establece, en la Disposición adicional 2ª, las competencias en materia de contratación en las Entidades Locales**

- **Alcalde – Presidente:** contratos de obras, de suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de concesión de servicios, los contratos administrativos especiales, y los contratos privados cuando su importe no supere el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de 6.000.000€, incluidos los de carácter plurianual, dentro de los límites de anualidades y porcentajes.
- **Pleno:** Resto de contratos cuando por su valor o duración no correspondan al Alcalde o Presidente de la Entidad Local, conforme al apartado anterior. Asimismo, corresponde al Pleno la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas generales.
- **Municipios de Gran Población:** la Junta de Gobierno Local, cualquiera que sea el importe del contrato o la duración del mismo, siendo el Pleno el competente para aprobar los pliegos de cláusulas administrativas generales.

→ **Juntas de Contratación** que actuarán como órganos de contratación en los contratos de obras que tengan por objeto trabajos de reparación simple, de conservación y de mantenimiento, en los contratos de suministro que se refieran a bienes consumibles o de fácil deterioro por el uso, y en los contratos de servicios cuando su valor estimado no supere el 10 % de los recursos ordinarios de la Entidad, o cuando superen este importe las acciones estén previstas en el presupuesto del ejercicio a que corresponda y se realicen de acuerdo con lo dispuesto en las bases de ejecución de este. En los casos de actuación de las Juntas de Contratación se prescindirá de la intervención de la Mesa de contratación.

En la Disposición adicional 3ª se regulan **normas específicas de contratación**, para estas entidades:

- Las Administraciones Públicas locales aplicarán las reglas contenidas en esta Ley, con las especialidades.
- Los actos de fiscalización se ejercen por el órgano Interventor de la Entidad local.
- Los informes que la Ley asigna a los servicios jurídicos se evacuarán por el Secretario. Será también preceptivo el informe jurídico del Secretario en la aprobación de expedientes de contratación, modificación de contratos, revisión de precios, prórrogas, mantenimiento del equilibrio económico, interpretación y resolución de los contratos. En los municipios de gran población, corresponderá al titular de la asesoría jurídica la emisión de los informes atribuidos al Secretario.

Con independencia de la figura del órgano de contratación, cabe hablar de **dos figuras vinculadas**:

**El responsable del contrato:** los órganos de contratación podrán designar un responsable (persona natural o jurídica y vinculada o no al órgano de contratación) al que corresponderá:

- 1) Supervisar la ejecución del contrato
- 2) Adoptar las decisiones necesarias para su correcta ejecución
- 3) Dictar las instrucciones

En los contratos de obra estas funciones las ejercerá el Director facultativo y en las concesiones de obras y servicios se designará a una persona que actúe en defensa del interés general.

La nueva Ley en su artículo 64 introduce una norma especial relativa a la lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses, mediante la cual se impone a los órganos de contratación la obligación de tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de contratación.

También la LCSP establece un esquema de tres órganos colegiados a nivel estatal con el doble objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en las Directivas y de combatir las irregularidades en esta materia.

- ✓ La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, órgano para la cooperación con la Comisión Europea y sigue siendo el órgano específico de consulta y regulación de la contratación pública.
- ✓ Comité de Cooperación, en el seno de la Junta para coordinar y cooperar con Entidades Locales y Comunidades Autónomas y elaborar la propuesta de Estrategia Nacional de Contratación Pública.
- ✓ La Oficina de Supervisión de la Contratación para supervisar en materia de contratación pública a los Poderes Adjudicadores. Rendirá cuenta anualmente a las Cortes y al Tribunal de Cuentas.

### 1.2.2. El contratista.

#### 1) Capacidad.

Es necesario para poder contratar con el Sector Público que el empresario justifique está capacitado o tiene aptitud. Su regulación aparece en el artículo 65 de la LCSP:

“Sólo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas”.

#### 2) Solvencia.

Los contratistas deben tener solvencia suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato. La solvencia, por otro lado, es un concepto complejo e incluye varias vertientes: económica, financiera, técnica y profesional.

Los órganos de contratación seleccionan los medios, de entre los señalados en la LCSP, que mejor sirvan para acreditar las condiciones de solvencia de los licitadores, en relación con el concreto contrato debiendo determinarse necesariamente en los pliegos y en el anuncio, las condiciones mínimas que deben alcanzar los licitadores y como el instrumento concreto exigido para la acreditación (declaración responsable, certificados, experiencia, etc.). Además, exige la Ley que los medios de solvencia elegidos guarden relación con el objeto del contrato y sean proporcionales al mismo con el objeto de evitar medidas restrictivas que limiten la concurrencia.

Para determinados contratos, el contratista debe justificar que está debidamente clasificado. Podemos definir a la clasificación como la verificación de oficio sobre la solvencia. La clasificación se establece como necesaria para contratar con los Poderes Adjudicadores en los contratos de obras y servicios, aunque sólo es un requisito indispensable en los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, ya que en los de servicios, el contratista puede presentar indistintamente clasificación u otro medio de solvencia acorde al objeto del contrato.

También permite la Ley que puedan contratar con el Sector Público las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor.



### 3) Prohibiciones para contratar.

La Ley recoge un conjunto de supuestos de prohibición de contratar entre los que están los de empresas condenadas por sentencia firme por la comisión de determinados delitos (fraude, cohecho, tráfico, delitos contra los trabajadores, el medio ambiente, etc.); la declaración de concurso voluntario; haber sido sancionado por infracción grave (se refiere ya a sanciones de tipo administrativo) en variados ámbitos, no haber formalizado el contrato, haber incumplido una obligación esencial del contrato, tener deudas con la Hacienda Pública o la Seguridad Social...

## 1.3. EL OBJETO, PRECIO Y CUANTÍA

### 1.3.1. Objeto

En el artículo 99 de la LCSP se establece que el objeto de los contratos del Sector Público ha de ser determinado, sin que ello impida que se cierre el objeto del contrato a una solución única, sobre todo en aquellos en los que se estime que pueden incorporarse innovaciones tecnológicas, sociales o ambientales que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se contraten.

La nueva Ley ha introducido un importante cambio ya que establece que siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, es decir, que el establecimiento de lotes es la regla general y cuando no se establezcan se deberá justificar su no procedencia en el expediente, ya que la LCSP permite al órgano de contratación no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos. Este cambio obedece a introducir medidas de apoyo a las PYMES para fomentar que puedan contratar con la Administración.

Se podrá reservar lotes para Centros Especiales de Empleo o para empresas de inserción, o un porcentaje mínimo de reserva de la ejecución de estos contratos en el marco de programas de empleo protegido. Igualmente se podrán reservar lotes a favor de determinadas entidades en los contratos de servicios de carácter social, cultural y de salud

Además cuando se establezcan diferentes lotes, se podrá limitar el número de lotes al que el licitador podrá presentar oferta y también se podrá limitar el número de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador. Se permiten las ofertas integradoras cuando el licitador presente oferta a varios lotes y en este caso, solo en éste, se realizará un solo contrato con el adjudicatario.

### 1.3.2. Precio

La nueva LCSP define, como novedad, en su artículo 100 el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN como el límite máximo de gasto que puede comprometer el órgano de contratación, incluido el IVA, salvo disposición en contrario.

La ley de Contratos del Sector Público introdujo el concepto del valor estimado del contrato, pero no existe una definición, es más un cálculo del mismo. Así, de acuerdo con lo fijado en el art.101 LCSP el VALOR ESTIMADO vendrá determinado el importe total, sin incluir el IVA, pagadero por el órgano de contratación según sus estimaciones.

En el cálculo del valor estimado deberán tenerse en cuenta los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales, de la ejecución material de los servicios, el beneficio industrial así como las eventuales prórrogas del contrato, la cuantía de las primas o pagos que se haya previsto abonar a los candidatos o licitadores y las modificaciones previstas.

El PRECIO es la retribución del contratista, la contraprestación que recibe del órgano de contratación. Consistirá siempre en un precio cierto que deberá expresarse en euros, u otras contraprestaciones en los casos en que se prevea mediante ley y si se fija en moneda extranjera, se expresará en la correspondiente divisa el importe y debe figurar su estimación en euros.

En el precio se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de IVA, que en todo caso se indicará como partida independiente.

Debe ser el adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato.

El precio del contrato podrá formularse en términos de precios unitarios o en términos de precios aplicables a tanto alzado a la totalidad o a parte de las prestaciones del contrato.

Además, se prohíbe el pago aplazado para las Administraciones Públicas, excepto en los contratos de arrendamiento financiero o con opción de compra.

Los precios de los contratos de las Administraciones Públicas podrán ser revisados o actualizados, de acuerdo con las reglas, sistemas y fórmulas establecidas en la LCSP.

#### 1.4. REVISIÓN DE PRECIOS EN LOS CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

La revisión de precios es una institución o mecanismo que tiene su origen en el principio de equivalencia económica o equilibrio financiero del contrato con la finalidad de adecuar la retribución del contratista a las oscilaciones de precios en el mercado como medida de protección de aquél.

Los precios de los contratos del sector público solo podrán ser objeto de revisión periódica y predeterminada, previa justificación en el expediente y conforme a la normativa, la revisión periódica sólo se podrá llevar a cabo en contratos de obra, en los contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas en los contratos de suministro de energía y en aquellos otros contratos en los que el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años.

En los supuestos en que proceda, el **Órgano de Contratación** podrá, en el Pliego de Cláusulas Administrativas o el contrato, establecer el derecho a revisión de precios y fijará la fórmula de revisión invariable durante la duración del contrato. Salvo alguna excepción, la revisión tendrá lugar sólo si se ha ejecutado en al menos, en el 20 % de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización.

El Consejo de Ministros podrá aprobar fórmulas tipo de revisión para determinados contratos.



Cuando resulte aplicable la revisión de precios mediante las fórmulas tipo, proporcionará en cada fecha, un coeficiente que se aplicará a los importes líquidos de las prestaciones realizadas que tengan derecho a revisión a los efectos de calcular el precio que corresponda satisfacer.

## 1.5. GARANTÍAS EXIGIBLES EN LA CONTRATACION DEL SECTOR PÚBLICO

Se puede definir la garantía como el aseguramiento del cumplimiento de una obligación. Para asegurar el cumplimiento de un contrato, la LCSP regula una serie de garantías a favor de las Administraciones Públicas, diferenciando entre las llamadas garantía provisional y la definitiva

La garantía provisional, que es aquella que presenta un empresario acompañando a su oferta en una licitación, no se exigirá en los procedimientos de contratación, salvo cuando el órgano de contratación de forma excepcional, por motivos de interés público, lo considere necesario y lo justifique en el expediente. Se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente después de la perfección del contrato. No podrá exceder de un 3 % del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el IVA

La garantía definitiva es aquella que solo debe constituir la el mejor postor y garantiza el cumplimiento del contrato por el adjudicatario estando afecta a las responsabilidades del contratista por actos propios derivados de la ejecución del contrato, asegurando así ante la Administración el resarcimiento de los daños y perjuicios que se le infieran por un cumplimiento defectuoso o incumplimiento del contrato.

La regla general es que se ha de exigir su constitución y solo excepcionalmente, según las circunstancias concurrentes en el contrato, el órgano de contratación podrá eximir al adjudicatario de la obligación de constituir garantía, justificándolo adecuadamente en los pliegos, especialmente en el caso de suministros de bienes consumibles cuya entrega y recepción deba efectuarse antes del pago del precio y en los contratos que tengan por objeto la prestación de servicios sociales o la inclusión social o laboral de personas pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social, así como en los contratos privados de la Administración. Esta exención no será posible en el caso de contratos de obras y de concesión de obras.

Con carácter general, el importe de la garantía definitiva será del 5 % del precio final ofertado por los que hagan la mejor oferta, excluido el IVA.

Existe también una garantía especial, la garantía complementaria, también llamada garantía adicional, que se suma a la definitiva para casos especiales, cuando debido al riesgo, por su especial naturaleza, régimen de pagos o condiciones del cumplimiento del contrato, resulte aconsejable incrementar el porcentaje de la garantía. Así, el órgano de contratación, podrá establecer en el pliego de cláusulas administrativas que, además, se preste una complementaria de hasta 5 % del precio final, excluido el IVA, pudiendo alcanzar la garantía total un 10 % del citado precio.

En particular, se podrá prever la presentación de esta garantía complementaria para los casos en que la oferta del adjudicatario resultara inicialmente incurso en presunción de anormalidad.

En cuanto a las formas de constitución de la garantía, el art.108 LCSP las regula siendo las siguientes:

- 1) En efectivo o en valores de Deuda Pública.
- 2) Mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España.
- 3) Mediante contrato de seguro de caución, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo.

No obstante, cuando así se prevea en los pliegos, esta garantía podrá constituirse mediante retención en el precio.

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta deberá acreditar en el plazo de diez días hábiles, la constitución de la garantía. De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la Administración no efectuará la adjudicación a su favor

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolución de éste sin culpa del contratista; se devolverá la garantía constituida en el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de garantía.

Para los contratos de entidades del Sector Público, los órganos de contratación podrán exigir garantía y su importe, podrá presentarse en alguna de las formas previstas, sin que resulte necesaria su constitución en la Caja General de Depósitos y sin que pueda sobrepasar los límites (3% y 5%) y establecer el régimen de devolución o cancelación

## **1.6. PREPARACIÓN DE LOS CONTRATOS: EXPEDIENTE DE CONTRATACION**

La celebración de un contrato por parte de la Administración Pública requerirá la previa tramitación de un expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando su necesidad, se referirá a la totalidad del objeto del contrato, sin perjuicio de la posibilidad de dividirlo en lotes a efectos de licitación y será publicado en el perfil de contratante

En el expediente se incorporarán el Pliego de Cláusulas Administrativas y el Pliego de Prescripciones Técnicas, además del documento de existencia de crédito y la fiscalización previa de la Intervención, en los casos que corresponda.

Se justificará adecuadamente en el expediente la elección de procedimiento y los criterios que se van a tener en cuenta para la adjudicación de los contratos, el valor estimado del contrato, en los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios y la decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso.

Completado el expediente, se dictará resolución motivada del órgano de contratación, que deberá ser objeto de publicación en el perfil de contratante, aprobando el expediente y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación. En esta resolución se aprueba también el gasto.

En los contratos menores, que son aquellos que se definen por cuantía, esto es, valor estimado inferior a 40.000 € en obras y 15.000 € en suministros y servicios, la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato, la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente.

La LCSP prevé un trámite abreviado del expediente, es decir, la tramitación de urgencia y de emergencia.

- La tramitación urgente del expediente está justificada cuando se dé una necesidad inaplazable o haya que acelerar su adjudicación por razones de interés público. La urgencia, se declara por el órgano de contratación y tiene que estar motivada. La tramitación del expediente de urgencia se tramita como el ordinario pero en plazos más breves, reducción a la mitad de los plazos, con alguna salvedad y también obliga a que el inicio de la ejecución del contrato tenga lugar en el plazo de un mes desde la formalización
- La tramitación de emergencia está prevista cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional. El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente administrativo, podrá ordenar la ejecución de lo necesario, sin sujetarse a requisitos formales, incluso el de la existencia de crédito suficiente y pudiendo realizarse de forma verbal. El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a un mes, contado desde la adopción del acuerdo de emergencia

### Pliegos de cláusulas administrativas y pliegos de prescripciones técnicas.

En los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares se incluyen los pactos y condiciones que definen los derechos y obligaciones de las partes del contrato, todo aquello que puede exigirse una a la otra. También pueden establecer penalidades para los casos de incumplimiento o de cumplimiento defectuoso de la prestación. Los pliegos deben aprobarse, por el órgano de contratación, previa o conjuntamente a la autorización del gasto. Los contratos se ajustarán al contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, cuyas cláusulas se consideran parte integrante de los mismos.

El Consejo de Ministros podrá aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales para su utilización en los contratos que se celebren por los órganos de contratación de la Administración General del Estado, pero las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración Local podrán aprobar este tipo de pliegos.

Los Pliegos de Prescripciones Técnicas se aprueban como los pliegos de cláusulas administrativas, y en ellos se concretan las condiciones para la realización de la prestación y se definen las calidades, sus condiciones sociales y ambientales, de conformidad con lo establecido para cada tipo de contrato.

La nueva Ley incorpora la regulación de las consultas preliminares del mercado, con la finalidad de preparar correctamente la licitación e informar a los operadores económicos sobre las condiciones de la licitación.

## 1.7. ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS: NORMAS GENERALES

Los órganos de contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y se ajustarán en su actuación al principio de transparencia.

La confidencialidad adquiere un valor relevante. Los órganos de contratación no podrán divulgar la información que los licitadores hayan establecido como confidencial y por otro lado, el contratista deberá respetar igualmente, aquella información a la que haya tenido acceso con ocasión de la ejecución del contrato que se haya configurado como confidencial en los pliegos o contratos o que, por su propia naturaleza, deba ser tratada como tal.

Con el fin de dar a conocer lo tengan previsto adjudicar y para cumplir con el principio de publicidad los contratos han de ser anunciados.

Regula la Ley dos tipos de publicidad, el anuncio previo de las obras, suministros o servicios SARA, tengan proyectado adjudicar en los 12 meses siguientes a elección del órgano de contratación, en el DOUE o en perfil de contratante, y el anuncio de licitación de cada contrato en concreto, que de realizarse en el perfil de contratante, en el BOE y si es un contrato SARA, además, en el DOUE, teniendo en cuenta el tiempo que razonablemente pueda ser necesario, según la complejidad, respetando los plazos mínimos fijados por la ley.

En el plazo previsto, los interesados presentan sus propuestas, una por cada empresario, ajustándose a lo previsto en los pliegos y cuya presentación supone la aceptación incondicional del contenido de los mismos. Destaca en la ley la regulación del Documento Europeo Único de Contratación, el documento de declaración responsable que el órgano de contratación tendrá que incluir en el Pliego en la que el licitador ponga de manifiesto que cumplen los requisitos exigidos para el concreto procedimiento al que se presentan.

La adjudicación de los contratos se puede tener en cuenta un único criterio o pluralidad de criterios. La LCSP le da carácter ordinario a la adjudicación utilizando una pluralidad de criterios

Cuando solo se utilice un criterio de adjudicación, este deberá estar relacionado con los costes, pudiendo ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad.

Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, siempre que sea posible, se dará preponderancia a aquellos los criterios objetivos (evaluables de forma automática), pero se regula la posibilidad de que existan criterios subjetivos (dependen de un juicio de valor) con una ponderación mayor que la correspondiente a los criterios objetivos, en cuyo caso la valoración corresponderá a un comité de expertos o a un organismo técnico especializado

Salvo cuando se tome en consideración el precio exclusivamente, deberá precisarse en los Pliegos la ponderación relativa atribuida a cada uno de los criterios de valoración, pudiéndose establecer criterios para el desempate.

Si el órgano de contratación presume que una oferta es inviable por ser anormalmente baja, solo podrá excluirla del procedimiento de licitación previa tramitación del procedimiento a través del cual es requerido el licitador para la presentación de información y documentos a efectos de justificación, se evaluará toda la información y documentación proporcionada por el licitador y si el órgano de contratación estimase que, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales, la excluirá de la clasificación.

Clasificadas las ofertas por orden decreciente, se requerirá requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta, para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, a que presente la documentación justificativa de la declaración responsable si no se hubiera aportado antes, disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato y haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. De no cumplimentarse en plazo, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 % del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, y se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas

El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. La resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará por medios electrónicos a los candidatos y licitadores y se publica en el perfil de contratante en el plazo de 15 días, conteniendo la información necesaria que permita a los interesados en el procedimiento de adjudicación interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.

En la notificación se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización del contrato.

Los contratos deberán formalizarse en documento administrativo pero el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos, no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo, la Administración se le exigirá el importe del 3 % del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de que incurra en prohibición. En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en emergencia, y sin perjuicio de lo establecido para los contratos menores, y para los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos de un sistema dinámico de adquisición.

Después de formalizado el contrato, hay que llevar a cabo una nueva publicación, ahora de la formalización, en el perfil de contratante del órgano de contratación, en el BOE y si el contrato esté SARA, el anuncio de formalización deberá publicarse, además, en el DOUE.

La LCSP regula como procedimientos de adjudicación ordinarios –en cuanto se pueden utilizar en cualquier licitación–, el procedimiento abierto y el restringido, y el resto de procedimiento sólo se podrán utilizar en los casos expresamente previstos en la Ley.

En el procedimiento abierto, que se caracteriza porque cualquier empresario puede presentar su proposición, los licitadores tienen que presentar sus ofertas con la documentación correspondiente dentro del plazo fijado en la convocatoria y a partir de ahí comienza el proceso de apertura y valoración de las propuestas conforme a lo establecido en los pliegos.

Hay dos modalidades:

- Procedimiento abierto simplificado, en los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros, y en suministros y servicios cuyo valor estimado sea igual o inferior a 100.000 euros y que en los criterios de adjudicación si hay alguno evaluable mediante juicio de valor que éste no supere el 25 % del total, salvo en los contratos de carácter intelectual que su ponderación no podrá superar el 45% del total. Este procedimiento solo se publicará en el Perfil, toda la documentación tiene que estar disponible por medios electrónicos y el plazo de presentación no podrá ser inferior a 15 días.

- Se prevé la posibilidad de un una tramitación especialmente sumaria para contratos de escasa cuantía, Procedimiento abierto supersimplificado para contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 80.000 y en los contratos de servicios y suministros, valor estimado inferior a 35.000 euros, excepto para aquellos que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, con plazos más reducidos y solo evaluables con criterios objetivos, ni siquiera se prevé la formalización mediante contrato.

En el procedimiento restringido en el que sólo pueden presentar proposiciones aquellos empresarios que, a su solicitud y en atención a su solvencia, **sean** seleccionados por el órgano de contratación, quedando prohibida toda negociación de los términos del contrato con los solicitantes o candidatos (artículo 160 a 165 LCSP).

El momento crítico del procedimiento restringido radica en la determinación de los empresarios que van a ser invitados a presentar sus ofertas. La LCSP trata de objetivar tal selección estableciendo de antemano y estableciendo en el anuncio los criterios por los que se realizará la selección de los empresarios que serán invitados.

Del resto de procedimientos, no ordinarios, el procedimiento negociado y el diálogo competitivo, ya estaban regulados y se han introducido uno nuevo: la asociación para la innovación.

El procedimiento negociado explica su singularidad en la reducción del número de los invitados al procedimiento y en la mayor discrecionalidad que deriva de una negociación que conduce la Administración mediante consultas con los candidatos elegidos y a partir de sus ofertas.



La peculiaridad del procedimiento hace que en los pliegos haya que determinar los extremos que han de ser objeto de negociación que deberá realizarse al menos con tres empresas siempre que sea posible.

Podemos diferenciar:

- **Licitación con negociación**, en los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios cuando se dé alguna de las situaciones contempladas en el artículo 167 de la LCSP. La adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido tras negociar las condiciones del contrato con los candidatos.

- **Procedimiento negociado sin publicidad**, sin la previa publicación de un anuncio de licitación, que han sufrido una importante modificación al desaparecer el supuesto de acudir a este procedimiento en función de la cuantía, al adolecer este supuesto de transparencia al carecer de publicidad. Únicamente se puede acudir a él en los casos establecidos en el artículo 168 de la LCSP, que hace referencia a obras, servicios o suministros muy concretos o determinados.

Otro de los procedimientos no ordinarios es el diálogo competitivo, regulado en la Ley para los contratos particularmente complejos. Su contenido lo determina el artículo 172 LCSP, cuando lo describe como el diálogo que dirige el órgano de contratación con los candidatos seleccionados, previa solicitud de los mismos, a fin de desarrollar una o varias soluciones susceptibles de satisfacer sus necesidades y que servirán de base para que los candidatos elegidos presenten una oferta.

El procedimiento de asociación para la innovación, tiene como finalidad el desarrollo de productos, servicios u obras innovadoras y la compra ulterior de esos suministros, servicios y obras si corresponden a los niveles de rendimiento y costes máximos acordados. La ley establece un procedimiento en varios artículos de desarrollo de este proceso, donde hay una selección y negociación con los candidatos.

Existen otros procedimientos regulados en la LCSP para casos especiales:

En el caso de los contratos menores, se podrá adjudicar directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación

En los contratos relativos a la prestación de asistencia sanitaria en supuestos de urgencia y con un valor estimado inferior a 30.000 euros, no serán de aplicación las disposiciones de la LCSP relativas a la preparación y adjudicación del contrato.

En los concursos de proyectos encaminados a la obtención de planos o proyectos, principalmente en los campos de la arquitectura, el urbanismo, la ingeniería y el procesamiento de datos, para su adjudicación se seguirá el procedimiento especial regulado en la ley. Su especialidad deriva no de circunstancias especiales, sino de la naturaleza misma del contrato. Lo más peculiar de estos contratos es la existencia de un jurado integrado por personas físicas independientes de los participantes en el concurso.